



# Romper el silencio y abrir el debate

Para nadie es un secreto que la política prohibicionista antidrogas, liderada por el hasta ahora vigente modelo norteamericano, ha sido un rotundo fracaso.

La guerra global contra las drogas se mantiene, en parte, debido a que muchas personas no distinguen entre los efectos dañinos del abuso de los estupefacientes y los de su prohibición. En lugar de considerar la demanda de drogas prohibidas un mercado y tratar a los adictos como pacientes, muchos líderes políticos no han hecho más que engrosar las ganancias de los traficantes y fomentar narcoestados. Por ello cobra tanto valor la declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia por su valentía y arrojo al proponer un cambio de paradigma.

Dicho valor aumenta si se tiene en cuenta, por un lado, que provino de un consenso entre algunos exmandatarios de países donde se produce o se comercia la droga, como Colombia, México y Brasil, al igual que de personalidades reconocidas e independientes de la órbita intelectual; y por otro lado, al pretender establecer, mediante tal planteamiento, una voz y una visión nueva y autónoma, capaz de influir en el debate internacional sobre drogas ilícitas. Esta participación latinoamericana en el debate global, como dicen ellos, procura marcar una transición de región problema a región

pionera en la implementación de soluciones innovadoras para los asuntos relacionados con las drogas ilícitas.

Para nadie es un secreto que la política prohibicionista antidrogas, liderada por el hasta ahora vigente modelo norteamericano, ha sido un rotundo fracaso, puesto que Latinoamérica sigue siendo el mayor exportador de cocaína y marihuana en el mundo. Ello sin mencionar el alto costo humano y las amenazas a las instituciones democráticas, traducidas en una elevadísima criminalización de la política o, si se quiere, en una politización del crimen. En otras palabras, la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas ha traído consigo corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos y de las fuerzas armadas, para sólo mencionar algunos.

## UN FRACASO EVIDENTE

El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (2008), desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nos recuerda por ejemplo cómo en 2007 la superficie total de siembra ilícita de arbusto de coca aumentó en

los tres países en que se registra mayor cultivo, es decir, Bolivia, Colombia y Perú, y llegó a 181.600 hectáreas, lo que equivale a un incremento del 16% con respecto a 2006. No obstante ello, la fabricación ilícita potencial de cocaína en la región continuó estable. Igualmente, si bien en Colombia se siguió con las actividades de erradicación, el cultivo ilícito de arbusto de coca se incrementó en un 27%. Más aún, de la superficie total de cultivo ilícito de América del Sur, el 55% correspondió a Colombia, el 29% al Perú y el 16% a Bolivia.



No menos preocupante resulta ser la manera en que los grupos delictivos internacionales continúan utilizando a la República Bolivariana de Venezuela como uno de los principales puntos de partida de las remesas de drogas ilícitas de Suramérica, según lo establecido en el citado informe.

Es interesante ver cómo incluso la propia ONU ni siquiera habla de la posibilidad de que haya “un mundo libre de drogas”. Su argumento radica, en primer lugar, en que el mercado de las drogas se ha estabilizado, explicando cómo más de 200 millones de personas —el equivalente al 5% de la población adulta mundial— aún sigue consumiendo drogas ilícitas; en segundo término, en que la producción de cocaína y opio es más o menos la misma que la de hace diez años (la de marihuana, sin embargo, sí ha aumentado ostensiblemente), y en tercera instancia, en que si bien el consumo de coca ha disminuido en Estados Unidos comparado con su punto más alto en la década de los ochenta, éste sí se ha incrementado proporcionalmente en otras regiones del mundo, entre ellas Europa.

Así las cosas, buscar modelos alternativos con origen latinoamericano, donde el objetivo sea aplicar políticas más eficientes, seguras y humanas, cobra mucho valor y tiene considerable sentido sobre todo en un momento de aparente “cambio” político en Estados Unidos con la llegada a la presidencia de Barack Obama, quien sin cumplir todavía sus primeros cien días de gobierno ya ha mostrado ser un líder independiente y poco temeroso a la hora de asumir riesgos. Signos que podrían interpretarse como una oportunidad para poner sobre la mesa un tema tan controversial como

## **Sacar las drogas ilícitas de la clandestinidad ayudaría también a reducir el riesgo de sobredosis y de contagios asociados a los productos sin control. En suma, se eliminaría la necesidad de obtener las sustancias en peligrosos mercados criminales y se permitiría que la drogadicción se tratara como un problema médico en vez de como una cuestión criminal.**

éste (al menos con la intención de dar un primer paso).

### **UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA**

Vislumbrar el problema de las drogas desde una perspectiva de salud pública, diferenciando las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que producen a la salud y a la sociedad, así como evaluar estrategias de “reducción del daño” mediante el tratamiento de los usuarios, son opciones que vale la pena mirar; eso sí, siempre y cuando se priorice en la disminución de la demanda en los principales países consumidores. Para ello resultaría eficiente, como bien lo dice la Comisión, llevar a cabo campañas educativas de información y prevención, similares a las del tabaco y el alcohol; focalizar la represión sobre el crimen organizado, y crear leyes, instituciones y regulaciones que permitan que los adictos dejen de ser compradores en el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Es más, sacar las drogas ilícitas de la clandestinidad ayudaría también a reducir el riesgo de sobredosis y de contagios asociados a los productos sin control. En suma, se eliminaría la necesidad de obtener las sustancias en peligrosos mercados criminales y se permitiría que la drogadicción se tratara como un problema médico en vez de como una cuestión criminal.

Con todo, no podemos dejar de lado un elemento crucial e inherente al ser humano: la responsabilidad individual. Tal como decía Milton Friedman, “La persona que decide usar drogas por sí misma no es una víctima inocente. Ha escogido ser una víctima... Yo no creo que sea moral imponer altos costos a otras personas por sus propias decisiones”.

De igual manera, de seguir con el modelo vigente de carácter prohibicionista, valdría la pena hacer una reflexión sobre las siguientes cifras: Estados Unidos gasta la no poco considerable suma de US\$40 billones anualmente en su lucha por erradicar la oferta de drogas, cantidad descomunal si se tienen en cuenta los resultados. A renglón seguido, este país ostenta el primer puesto en el *ranking* de reclusos per cápita, pues con menos de 5% de la población del mundo, acoge a 25% de los presidiarios del planeta. El número de personas encerradas por delitos relacionados con las drogas ha pasado de 50.000 en 1980 a unos 500.000 al día de hoy, cifra que supera el total de presos de Europa Occidental por cualquier causa. ¿Esto no resulta acaso más costoso en términos fiscales (y humanos) que lidiar con el tema desde la perspectiva de la salud pública?

Es por todo esto por lo que vale la pena preguntarse lo siguiente: ¿cómo se pueden minimizar los problemas de la producción ilegal de drogas? Pensemos en ello como un reto global de control del vicio. Nadie espera erradicarlo —es



imposible—, pero hay que contenerlo y regularlo aunque sea ilegal; éste, sin duda, es un buen punto de partida.

### MÁS ALLÁ DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Las características del mercado de las drogas son, sin duda, complejas, pero resulta indispensable entenderlas para poder determinar qué podría pasar en caso de que se llegara a legalizar su venta. En primera instancia, se ha podido demostrar que su prohibición no impide, en lo absoluto, que el consumidor tenga un fácil acceso a éstas. En segundo término, los consumidores en su mayoría lo hacen esporádicamente e impulsados por el deseo de buscar nuevas formas de divertimento, algo no muy diferente del papel que puede cumplir el consumo de tabaco o alcohol, sustancias que de hecho han demostrado ser aún más adictivas. En tercer lugar, el número real de adictos a las drogas es mínimo comparado con la cantidad de consumidores esporádicos, sector éste de la población sujeto a ser tratado como paciente en el sistema de salud. En cuarta instancia, como se mencionó inicialmente, se ha podido demostrar que durante los últimos 20 años el consumo de droga se ha estabilizado; es decir, es muy probable que el número de consumidores esporádicos y adictos no aumente de modo significativo en caso de que se legalice la venta de droga.

Por otro lado, se ha podido establecer que el precio de una sustancia ilegal se determina más por el costo de su distribución que por el de su producción. En el caso de la cocaína, por ejemplo, su costo en las selvas colombianas, bolivianas o peruanas, comparado con el de su venta al consumidor final en Madrid, París o Nueva York, se multiplica por cien. Y el factor que contribuye a que éste sea su valor no es ninguno distinto del de los riesgos que ha debido enfrentar para llegar a las manos del consumidor final. Así mismo, vale la pena recordar que la demanda por droga no necesariamente disminuye cuando los precios suben, al tiempo que cabe señalar que hay suficiente evidencia para demostrar que



el negocio de las drogas se adapta con facilidad a su distribución en el mercado. La represión efectiva ha logrado, como mucho, que los cultivos pasen de un lugar a otro, pero no ha conseguido su erradicación definitiva.

### EL IMPACTO SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO

La ONU sitúa el valor del mercado mundial de drogas ilegales en unos US\$400 millones, esto es, alrededor del 6% del comercio global. Los extraordinarios beneficios que atraen a quienes están dispuestos a asumir riesgos enriquecen a los delincuentes, a los terroristas, a las insurgencias violentas, y a los gobiernos y policías corruptos.

Efectivamente, se ha comprobado que la política prohibicionista, lejos de haber combatido con eficacia a los carteles de la droga, y con ello a un importante sector que congrega al crimen organizado, lo que ha hecho es incentivarlo y fortalecerlo como jamás se había visto antes en la historia; ante tal situación, son los países en desarrollo los que han

tenido que pagar el precio más alto. Sin mencionar siquiera el caso de Colombia, que ha sido hasta el momento uno de los más graves de todos, hoy México está convirtiéndose en una de las principales víctimas del narcotráfico en el mundo. Tanto así que debido a su vecindad con Estados Unidos, los crímenes cometidos por los carteles de las drogas en la frontera han obligado a la administración Obama a tomar serias medidas, identificando dichas acciones como una nueva y verdadera amenaza a su seguridad nacional, puesto que no se puede olvidar que el principal proveedor de armas para esta guerra entre carteles es la propia nación norteamericana.

Así las cosas, es clave romper el silencio y abrir el debate, pues al menos nuestra generación, la de Carlos Lehder, Pablo Escobar y el Modelo Bolivariano, ha visto muy pocos avances ya que sigue habiendo altos niveles de deterioro moral en la población, incalculables niveles de corrupción y mucha sangre derramada. Todo ello por causa del narcotráfico y sus tenebrosos tentáculos. **P**